



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Derecho

Curso 2013/2014

DOCTRINA PAROT: ANÁLISIS E IMPACTO SOCIAL

Autora: Ana Pérez Miguel

Tutora: Ángela Figueruelo Burrieza

Mes: Junio Año: 2014



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Derecho

Curso 2013/2014

DOCTRINA PAROT: ANÁLISIS E IMPACTO SOCIAL

Autora: Ana Pérez Miguel

Tutora: Ángela Figueruelo Burrieza

Mes: Junio

Año: 2014

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	Pág.1
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 197/2006 DE 28 DE FEBRERO.....	Pág.5
II.1. Antecedentes.....	Pág.5
II.2. Origen.....	Pág.6
II.3. Sentencia.....	Pág.6
RECURSOS DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL....	Pág.11
III.1. Qué es el Tribunal Constitucional.....	Pág.11
III.2. Recurso de amparo y requisitos para su interposición.....	Pág.12
III.3. Recursos de amparo contra la doctrina Parot.....	Pág.13
SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DE 26 DE JUNIO DE 2012 Y EFECTOS DE LA MISMA.....	Pág.16
IV.1. Qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	Pág.16
IV.2. Convenio Europeo de Derechos Humanos.....	Pág.17
IV.3. Origen.....	Pág.18
IV.4. Sentencia.....	Pág.20

IV.5. Análisis realizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las posibles violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Estado español.....Pág.22

IV.6. Recurso del estado español contra la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de Junio de 2012.....Pág.25

IV. 7. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de Octubre de 2013.....Pág.25

IV.8. Efectos.....Pág.25

IV.9. Ejecución de las sentencias del TEDH y problemática de dicha ejecución en el ordenamiento jurídico español.....Pág.26

IMPACTO SOCIAL.....Pág.30

CONCLUSIÓN.....Pág.33

ACRÓNIMOS

JURISPRUDENCIA ANALIZADA

BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN

La aplicación del beneficio penitenciario sobre la condena, que permitía redimir un día de pena por cada dos de trabajo, fue creada en la época de Franco con la finalidad de ir vaciando las cárceles, repletas de presos políticos. Durante la dictadura los beneficios penitenciarios no se aplicaban a asesinos en serie, para los que el Código Penal franquista preveía la pena de muerte.

La Constitución Española de 1978 suprimió la pena capital y la redención de penas por el trabajo también empezó a aplicarse a este tipo de reclusos. Esta es la razón por la cual la cuestión del cómputo de los beneficios penitenciarios en relación con el límite máximo de cumplimiento de 30 años de cárcel que establecía el Código Penal de 1973 en su Art 70.2, no se planteó ante el Tribunal Supremo (en adelante TS) hasta 1994, año en que se enfrentó al caso del Bocas, condenado por violación y asesinato. En ese caso, el TS resolvió que el beneficio se aplicaba sobre el límite de cumplimiento de 30 años y no sobre cada una de las penas impuestas individualmente. La misma cuestión no vuelve a suscitarse ante el TS hasta el año 2006 en que le llega el caso de Henri Parot, condenado por 200 delitos de asesinato a penas que sumaban más de 4.000 años de prisión. El TS, en la sentencia 197/2006, se aparta expresamente del criterio seguido en 1994, y decide que la redención debe computarse sobre cada una de las penas impuestas y no sobre el límite de cumplimiento de 30 años regulado por el Art 70.2 del Código Penal (en adelante CP) de 1973. Esta sentencia ha formado jurisprudencia mediante su reiteración por otras posteriores y ha sido confirmada por más de 25 sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, la conocida y polémica doctrina Parot tiene su origen en la sentencia 197/2006, de 28 de febrero, de la Sala de lo Penal del TS. En esta Sentencia, el TS avala el cómputo de los beneficios penitenciarios individualmente sobre cada una de las penas impuestas, de manera sucesiva y sin descontar del límite máximo de 30 años los días redimidos por el trabajo, sino sobre la pena de mayor gravedad y, una vez extinguida, pasar a la siguiente, sucesivamente hasta el máximo de 30 años. Por tanto, esta doctrina permite cambiar la forma de calcular los beneficios penitenciarios, pudiendo alargar el tiempo de permanencia en prisión.

Los argumentos más destacados o principales del TS en esta sentencia son dos: Primero: tiene que ver con la redacción de los artículos 70.2 y 100 CP de 1973. El Art 100 referente a la redención de penas por el trabajo utiliza el término pena impuesta, mientras que el Art 70.2 que recoge el límite máximo de cumplimiento de 30 años

emplea el término condena, por lo que la redención debe aplicarse sobre las penas impuestas y no sobre el límite de cumplimiento.

Segundo, que no podía darse el mismo tratamiento penitenciario a quien ha cometido un asesinato que a quien ha cometido varios.

La derogación de esta doctrina se produce por la sentencia de 21 de octubre de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) que daba la razón a la presa Inés Del Río Prada, miembro de la banda terrorista ETA. En esta sentencia del TEDH se cuestiona la forma en la que se había aplicado a la terrorista el beneficio penitenciario de la redención de penas por el trabajo.

Lo primero que hay que decir es que la pena impuesta a Inés Del Río siempre fue la misma: 3800 años de prisión con el límite máximo de cumplimiento de 30 años. Todas las resoluciones judiciales le advirtieron de que iba a cumplir un máximo de 30 años y que saldría en libertad en 2017. Además, hasta la sentencia Del Río, el TEDH de Estrasburgo tenía una consolidada doctrina según la cual el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables únicamente se refería al delito y a las penas, no a los beneficios penitenciarios. Lo que pretende dicho principio es que quien se propone cometer un delito sepa que lo que va a hacer está mal -es delito- y la responsabilidad en que puede incurrir, la pena. Pero el principio no se concibe para que, en el momento de cometer un asesinato, el delincuente en serie pueda sacar la calculadora y saber exactamente el tiempo que va a estar en prisión después de aplicar las redenciones, beneficios y grados penitenciarios. Y es que todos los Códigos Penales del mundo fijan, para cada delito, una pena en abstracto.

Lógicamente la sentencia del TEDH anulando la doctrina Parot ha creado en la opinión pública española un gran malestar y es una sentencia que va a tener graves consecuencias en tiempos relativamente breves. La sentencia es obligatoria para España y en nuestro país, su ejecución corresponde a los tribunales sentenciadores, que en este caso es la Audiencia Nacional, al ser competente para conocer de los casos de terrorismo.

Tras la puesta en libertad de Inés Del Río, los tribunales han examinado caso por caso y han ido ordenando la liberación de quienes se encuentren en el mismo supuesto que la terrorista. Por tanto, estamos asistiendo a una liberación progresiva, no solo de terroristas de ETA, sino también de peligrosos delincuentes comunes, lo que ha generado una gran alarma social.

También hay voces que se alejan de las críticas que se vierten contra esta sentencia del TEDH y exculpan al citado Tribunal, culpando a nuestros políticos así como el TS, quien apoyó la doctrina Parot sin tener en cuenta que su aplicación de forma retroactiva vulnera tanto el Derecho Penal en su artículo 1º, que establece la irretroactividad de penas punitivas contrarias a reo, así como los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos que establecen la irretroactividad de las leyes penales desfavorables.

Los defensores de esta postura mantienen que la aplicación de la Doctrina en sí misma no es ilegal, la ilegalidad se comete al hacerla retroactiva. Es decir, una vez que entra dentro del ordenamiento se podrá aplicar pero solo a los delitos cometidos a partir de la entrada en vigor de la Ley y no antes.

Lo cierto es que la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha suscitado en la sociedad española distintas posturas, si bien la reacción general es de indignación, motivo por el que mas allá de aspectos jurídicos legales, una reacción social unánime constituye un indicio importante para el legislador, de que algo necesita revisión, incluso revisión urgente.

También es evidente que el funcionamiento ordinario del derecho no debe quedar a merced de reacciones populares. Para bien o para mal, el principio de seguridad jurídica requiere que las frías razones del derecho, mejor o peor interpretadas, tengan la última palabra.

Un pensador como David Hume¹, ilustre representante del emotivismo ético, sostenía una teoría social racionalista, considerando posible generar cooperación social sobre la base de que cada individuo persiguiera su "verdadero" interés, su interés a largo plazo, el cual pasaría tarde o temprano por la cooperación. Si a pesar de saber cuál es nuestro interés no lo seguimos, a veces, dice Hume, es porque nuestra conducta se ve distorsionada por "pasiones violentas" que no atienden a razones y que bloquean cualquier consideración estratégica, enrocándonos en la satisfacción de la pasión presente. Claramente, la de Hume es una teoría social ilustrada, cuyo potencial teórico quedaría cuestionado si se interpretara como una teoría descriptiva de lo que de hecho sucede, y no, más bien, como una teoría normativa sobre lo que debería suceder. En

¹ DAVID HUME fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés y constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Algunas de sus obras son: Ensayo de moral y política (1744); Tratado de la naturaleza humana (1739), de mi propia vida (1776).

medio de esta fractura entre racionalidad formal y sentimientos de justicia, debería abrirse una vía de reflexión sobre los fundamentos de nuestro estado de derecho y los cauces para evitar la desigualdad resultante de prestar la misma protección legal al criminal y a su víctima. Pues resulta chocante que las personas que atentan contra la pacífica convivencia social, respondiendo a ideologías o intereses particulares y excluyéndose voluntariamente del Estado de derecho terminen beneficiándose de los derechos que aquél les reconoce. Esto es lo que explica la indignación ciudadana, pronunciando el abismo entre el sentir del pueblo y las instituciones a su servicio.

La plena actualidad de este tema, así como la controversia que origina en la opinión pública contraponiendo los razonamientos jurídicos con el sentir general, son los motivos por los que me he inclinado por hacer este trabajo.

La metodología utilizada, de carácter analítico-descriptivo, se ha basado en la búsqueda y análisis de fuentes en las que se plasmaban las distintas posturas existentes sobre este tema, para poder ir formando mi propia opinión al respecto.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 197/2006 DE 28 FEBRERO

II.1: Antecedentes

El TS al dictar la sentencia 197/2006 de 28 de febrero se aleja de la postura que venía manteniendo hasta ese momento, realizando por tanto, una interpretación totalmente novedosa sobre el Art. 70.2 ² CP 1973, relacionado con el Art. 100 ³ del mismo.

Hasta el año 2006, el TS partía de la concepción de que la pena resultante de la acumulación, en base al límite de cumplimiento máximo de 30 años, es una pena nueva de la misma naturaleza que todas las penas impuestas, y será sobre ella donde deberán computarse todos los beneficios penitenciarios. Esta es la postura mantenida por el TS en su jurisprudencia, que se refleja en las sentencias del mismo, como: STS de 8 de marzo de 1994, STS de 15 de septiembre de 2005 y STS de 14 de octubre de 2005.

Posiblemente el cambio interpretativo y jurisprudencial llevado a cabo por el TS con la Doctrina Parot tenga relación con la concepción moral de la mayoría de la sociedad española, que no considera justo que un reo condenado inicialmente a una pena de muy larga duración (incluso de miles de años) debido a la gravedad de los hechos cometidos, acabe cumpliendo una pena de menos de 30 años gracias a la aplicación de limitaciones temporales y beneficios penitenciarios.

Hay que tener en cuenta que las limitaciones temporales pueden ser vistas como un principio de impunidad, ya que las penas impuestas no serán de la misma duración que la condena resultante, lo cual se debe a razones de política criminal que van en

² Art. 70.2 CP 1973: el máximo de cumplimiento de la condena del culpable no podrá exceder del triplo del tiempo por que se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximo de tiempo predicho, que no podrá exceder de treinta años.

La limitación se aplicará aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno sólo.

³ Art. 100 CP 1973: Podrán redimir su pena con el trabajo, desde que sea firme la sentencia respectiva, los reclusos condenados a penas de reclusión, prisión y arresto mayor. Al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación del Juez de vigilancia, un día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido, se le contará también para la concesión de la libertad condicional. El mismo beneficio se aplicará, a efecto de liquidación de su condena, a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad.

No podrán redimir pena por el trabajo:

1.º Quienes quebranten la condena o intentaren quebrantarla, aunque no lograsen su propósito.

2.º Los que reiteradamente observen mala conducta durante el cumplimiento de la condena.

contra del principio constitucional del cumplimiento de las penas, recogido en el Art 118 CE⁴.

Sobre todo causan gran indignación los casos en que están implicados terroristas de la banda terrorista ETA, debido a la sensibilidad de la sociedad española ante las atrocidades cometidas por esta banda terrorista a lo largo de la historia española.

II.2. Origen

El origen de la Doctrina Parot reside el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 26 de abril de 2005, dictado en condena de Henri Parot (miembro de la banda terrorista ETA).

Había 26 sentencias de condena contra Henri Parot cuya pena ascendía a un total de 4.797 años de prisión, por 26 asesinatos consumados y 166 frustrados, hechos punibles que Ministerio Fiscal divide en dos momentos distintos:

1º) Hechos cometidos entre el año 1979 y el año 1982

2º) Hechos cometidos entre el año 1984 y el año 1990.

De esta manera, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó en su Auto la acumulación de penas de la siguiente manera:

- Penas por los hechos cometidos desde 1979 a 1982: sobre las que se aplicará el límite de cumplimiento máximo de 30 años, recogido en el Art. 70.2 CP de 1973.
- Penas por los hechos cometidos desde 1984 a 1990: que constituyen otro bloque distinto del anterior, sobre el que se aplicará el límite máximo de cumplimiento de 30 años (Art. 70.2 CP 1973)

En definitiva, la sentencia viene a decir que el condenado debería cumplir el límite máximo de 30 años sobre cada uno de los periodos juzgados.

II.3 Sentencia

Tras la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 26 de abril de 2005 mencionada anteriormente, el condenado Henri Parot interpone un recurso de casación (nº 598/2005- P) contra la misma ante la Sala Segunda del TS, resuelto en la STS 197/2006, que es la que da origen a la Doctrina Parot.

⁴ Art. 118 CE: Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

La defensa de Henri Parot interpone el mencionado recurso de casación por infracción de ley, al amparo del At 849.1 LECrim⁵ por: aplicación indebida del Art 70.2 CP de 1973 en relación con los artículos 17.5 LECrim⁶ y 988 LECrim⁷, así como por la vulneración de los artículos 9.3⁸, 14⁹ y 25¹⁰ de la Constitución Española de 1978. Dicho recurso de casación fue apoyado por el Ministerio Fiscal.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en defensa del auto dictado argumenta, entre otras cosas, lo siguiente:

1º.- Que el periodo de tiempo de comisión de los hechos delictivos es tan dilatado (de 1979 a 1990) que no puede aplicarse ningún criterio de conexidad. Además hay una interrupción, desde 1982 a 1984, que permite agruparlos en dos periodos para después aplicar la regla del límite máximo de cumplimiento del Art 70.2 CP 1973 sobre cada uno de ellos. Si bien admite que todos los hechos delictivos tienen que ver con sus actividades en la banda terrorista ETA.

2º.- Que nuestra legislación penal parte del concurso real para la extinción de todas las penas impuestas por cada uno de los delitos cometidos, bajo el principio del

⁵ Art. 849.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrím): Se entenderá que ha sido infringida la ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación: 1.º Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de ley penal.

⁶ Art. 17.5 LECrím: Consideranse delitos conexos: 5.º Los diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse contra la misma, causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados.

⁷ Art. 988 LECrím: (...) Cuando el culpable de varias infracciones penales haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta Ley, el Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia, de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal. cumplimiento de las mismas (...)

⁸ Art. 9.3 CE: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

⁹ Art. 14 CE: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

¹⁰ Art. 25 CE: 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados (...)

cumplimiento simultáneo de todas ellas si fuera posible. Cuando no fuera posible el cumplimiento simultáneo, como es el caso, se optará por el cumplimiento sucesivo; así lo establece el Art. 70.2 CP 1973.

El cumplimiento sucesivo se llevará a cabo de la siguiente manera:

- a) Penas por orden de gravedad (primero las penas privativas de libertad de mayor duración).
- b) Sucesión respecto de las ya cumplidas.
- c) Sólo se altera el orden de cumplimiento sucesivo por el indulto de las primeras penas (las de mayor gravedad)

3º.- Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe la cadena perpetua, en aras de la reinserción social. Pero esa no es la única finalidad, sino que existe un doble componente en la pena: el fin resocializador y la finalidad aflictiva o de prevención especial, relacionada con razones de política criminal.

Por ello no se produce vulneración alguna del Art 25 CE, que no limita la orientación de la pena a la reinserción social, ya que también hay que tener en cuenta el principio basado en consideraciones de política criminal. El autor de varias infracciones debe cumplir todas o la mayor parte de las penas impuestas, sin tener el mismo trato punitivo que el autor de un sólo delito.

Tras analizar las alegaciones de Henri Parot, así como las de la Audiencia Nacional, el TS estima el recurso de casación nº 598/2005- P. interpuesto por el recurrente contra el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y establece que la resolución de ésta última no puede mantenerse, pues carece de fundamento al basarse en una desconexión temporal que no tiene cabida ni en la ley ni en la jurisprudencia. En el artículo 70.2 CP de 1973 sólo se exige para la aplicación del límite máximo de cumplimiento de 30 años que exista conexidad y no recoge ningún requisito de temporalidad en la comisión de los hechos delictivos para poder aplicar esta limitación. Si se exigieran requisitos de temporalidad y no solamente de conexidad, llegaríamos al resultado de que Henri Parot tendría una condena más favorable en caso de haber continuado cometiendo delitos entre los años 1982 y 1984 que de haber permanecido inactivo, ya que en el primer caso si se aplicaría la regla del Art. 70.2 CP 1973 a la totalidad de los hechos delictivos sin necesidad de dividirlos en dos bloques, lo cual resultaría al menos incongruente.

Por tanto, aplicando la regla del Art. 70.2 CP 1973, esos delitos son conexos ya que todos tienen que ver con las actividades realizadas por Henri Parot en la banda

terrorista ETA. De esta manera, tendrán una única acumulación sobre la que se aplicará el máximo de 30 años de cumplimiento de condena.

Pero además, la Sala Segunda del TS, en el Fundamento de Derecho 5º, hace una reinterpretación en la forma de computar las redenciones de las penas por el trabajo, reguladas en el Art. 100 CP 1973. Para esta reinterpretación se basa en que la redacción del Art. 100 CP 1973 habla de pena impuesta, mientras que en el Art. 72.2 CP 1973 el término empleado es el de condena, por lo tanto los beneficios penitenciarios referidos a la redención de penas por el trabajo se aplicarán individualmente sobre cada una de las penas impuestas de manera sucesiva hasta alcanzar el límite máximo de los 30 años.

Esta doctrina se aplica a los presos condenados antes del año 1995, ya que con la modificación del nuevo código en el año 2003, a través de la ley 7/2003, el límite efectivo de cumplimiento de la pena se eleva hasta los 40 años y la posibilidad de redimir dicha pena por trabajo se suprime.

Pero esta sentencia 197/2006 de 28 de febrero que da lugar a la doctrina Parot, no se dicta de manera unánime, ya que tres de los quince magistrados emiten un voto particular, en concreto: José Antonio Martín Pallín¹¹, Joaquín Giménez García¹² y Perfecto Andrés Ibáñez¹³, quienes manifestaron su desacuerdo con la sentencia alegando lo siguiente:

- *Que de la aplicación del límite máximo de cumplimiento de 30 años sobre el total de las penas impuestas surge una pena nueva, la pena de cumplimiento. Es una pena de la misma naturaleza pero distinta, y será sobre ella donde se deberían aplicar las redenciones de pena por el trabajo del Art. 100 CP.*

- *Además hay que tener en cuenta los artículos 9.3 y 14 CE. El Art. 9.3 CE consagra la irretroactividad de la ley penal desfavorable; mientras que el Art. 14 CE consagra el principio de igualdad, con matices para los casos de terrorismo en el Art. 55.2 CE, pero que no se refieren al cumplimiento ni enjuiciamiento de las penas.*¹⁴

¹¹ JOSE ANTONIO MARTÍN PALLÍN: destacado jurista español nacido en A Coruña en 1936. Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo que ha compaginado dicha actividad profesional con la participación en organizaciones de derechos humanos.

¹² JOAQUÍN GIMÉNEZ GARCÍA: Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo desde el año 1998.

¹³ PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ: magistrado del Tribunal Supremo y director de la revista Jueces para la Democracia. Información y debate.

¹⁴ Votos particulares de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 197/2006 de 28 de Febrero.

El problema que estos tres magistrados ven en la STS 197/2006 es que no interpretan el Art. 70.2 CP, sino que lo reescriben aplicando de manera retroactiva y desfavorable al reo el Art. 78 CP 1995.¹⁵

Aunque el Art 3.1 del Código Civil ¹⁶ admite la jurisprudencia evolutiva, siempre que ésta se base en fundamentos sólidos legales, no es así cuando la interpretación o cambio de criterio va contra los intereses del reo.

En definitiva, en el voto particular se defiende que la pena resultante de la acumulación (30 años) es una pena nueva y, por ello, deberán operar sobre la misma los beneficios penitenciarios.

Consideran que las razones de política criminal no pueden justificar el incumplimiento del principio de legalidad, aunque estemos ante un sanguinario terrorista que no se arrepiente de los hechos perpetrados.

¹⁵ Art. 78 CP 1995: Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.

¹⁶ Art. 3.1 CC: Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

III. RECURSOS DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

III.1. Qué es el Tribunal Constitucional

Como bien señala BALAGUER CALLEJÓN ¹⁷, el Tribunal Constitucional (en adelante TC) es el órgano constitucional encargado de la suprema interpretación de los preceptos contenidos en la Constitución Española de 1978, texto del cual es el máximo garante.

Es un órgano de carácter jurisdiccional que no forma parte del poder judicial, sino que está por encima y al margen de los tres poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

Su jurisdicción abarca todo el territorio nacional y se compone de dos Salas, formadas por seis Magistrados; la Sala Primera está presidida por el Presidente del TC, mientras que la Sala Segunda la preside el Vicepresidente. A su vez, cada una de las Salas se descompone en dos Secciones formadas por tres Magistrados.

El TC es independiente en el ejercicio de sus funciones, quedando solamente sometido a la Constitución Española (en adelante CE) y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC).

Aparece regulado en el Título IX de la Constitución (artículos 159 a 165). La composición del mismo deberá cumplir lo establecido en el Art. 159 CE. De esta manera, el TC se compone por 12 magistrados, nombrados por el Rey:

- Cuatro a propuesta del Consejo de los Diputados, por mayoría de 3/5 de sus miembros.
- Cuatro a propuesta del Senado, también por mayoría de 3/5 de sus miembros.
- Dos a propuesta del Gobierno.
- Dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ).

La duración del mandato será de nueve años, pero con el fin de asegurar la continuidad en las actuaciones del Tribunal, éste se renueva por terceras partes cada tres años (Art. 159.3 CE). Los magistrados elegidos deberán ser juristas, Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional.

¹⁷ BALAGUER CALLEJÓN, F, “Manual de Derecho Constitucional”, *Organización y competencias del Tribunal Constitucional*, Tecnos, Madrid 2011, p.263

Dicha condición de magistrado del TC será incompatible con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

III.2. Recurso de amparo y requisitos para su interposición

La institución del recurso de amparo ¹⁸¹⁹ aparece regulada en el Título III de la CE (arts 41 a 58). Es un recurso que sirve como mecanismo de defensa o de garantía de los derechos fundamentales, reconocidos en los artículos 14 a 29 de la CE y del derecho de objeción de conciencia al servicio militar del Art. 30 de la CE. Por tanto, es una vía de protección de unos derechos contenidos en el núcleo duro de la CE [Sección I del Capítulo II del Título Primero de la CE (Arts 15 a 29) y los derechos reconocidos en el Art 14 y 30 del mismo texto legal.]

Puede ser interpuesto por todas las personas físicas o jurídicas directamente afectadas, ya sean nacionales o extranjeras, así como el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, ante el TC. El Art. 49 de la CE establece que el recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se deben exponer de forma clara y concisa los hechos que la fundamenten, citando los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y fijando con precisión el amparo que se solicita para preservar o establecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. La carga de la prueba la tiene el recurrente en amparo.

Tiene un carácter subsidiario, ya que exige haber acudido con anterioridad a las vías jurisdiccionales ordinarias. Es decir, antes de poder acudir en amparo ante el TC es requisito indispensable haber agotado todas las vías ordinarias. Además de haber agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial, el Art. 44 de la CE regula otros dos requisitos que han de cumplirse para poder interponer el recurso de amparo:

- Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que

¹⁸ BALAGUER CALLEJÓN, F, “Manual de Derecho....”, op.,cit., p 286

¹⁹ FIGUERUELO BURRIEZA, A, *El recurso de amparo :Estado de la cuestión*, Biblioteca Nueva, Madrid 2001.

dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el TC.

- Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.

Este recurso puede interponerse ante:

- Decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes Generales o cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

El plazo para recurrir en este caso será de 3 meses. (Art 42 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,-en adelante LOTC-)

- Disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las CCAA o de sus autoridades o funcionarios o agentes. En este caso, el plazo para interponer el recurso es de 20 días, contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución judicial. (Art 43 LOTC).

- Actos y omisiones de un órgano judicial que impliquen violaciones de derechos y libertades. El plazo para recurrir será de 30 días. (Art 44 LOTC)

III.3. Recursos de amparo contra la doctrina Parot

La aplicación de la doctrina Parot ha afectado a numerosos reos, debido a que la STS 197/2006 que da origen a la misma, ha sido seguida por nuestro ordenamiento jurídico posteriormente en multitud de sentencias.

Ante esta situación, los afectados, una vez agotada la vía judicial ordinaria, han acudido ante el TC interponiendo recursos de amparo contra la doctrina Parot.

La Doctrina Parot fue modificada parcialmente por la Sentencia del TC 57/2008, de 28 de abril de 2008, por la que se establece la Doctrina del doble cómputo de las penas. Esta doctrina contempla la posibilidad de restar el tiempo que un recluso ha permanecido en prisión preventiva de cada una de las condenas firmes que esté cumpliendo por otros delitos, pues lo contrario supone una vulneración del derecho a la libertad establecido en el artículo 17.1 de la Constitución española de 1978.

Así el TC ha establecido un cuerpo de doctrina constitucional a través de la resolución de 30 sentencias: SSTC 39/2012 a 69/2012.

De todas estas sentencias, solo se estima el recurso de amparo en tres ocasiones: SSTC 39/2012, 57/2012 y 62/2012, teniendo como consecuencia la excarcelación de los terroristas de ETA José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta²⁰, Juan María Igarataundi Peñagarikano²¹ y José María Pérez Díaz.²²

La estimación de estos recursos de amparo se basa en el principio de intangibilidad de las resoluciones firmes y de seguridad jurídica, ya que al Art. 9.3 de la CE establece que el órgano jurisdiccional no puede variar las resoluciones firmes, aun cuando contuvieran una doctrina errónea. El TC no se posiciona en contra de la doctrina Parot, la cual considera que es el resultado de una interpretación llevada a cabo por el TS sobre preceptos del CP 1973 que no debe entrar a valorar, sino que en estos tres casos no cabe la revisión de la liquidación de las condenas por haber ganado firmeza las resoluciones de la audiencia nacional.

De los recursos de amparo restantes tres fueron inadmitidos por falta de agotamiento de la vía judicial en las sentencias del TC: 58/2012, 60/2012 y 63/2012, que resolvían los casos de Miguel Turrientes Ramírez , Itziar Martínez Sustatxa e Isidro María Garalde Bedialauneta , respectivamente.

Se inadmiten debido a la falta de invocación ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, al considerar que en esos casos no se agota la vía jurisdiccional previa, al no intentar una nulidad o recurso de casación.

Los otros 24 recursos de amparo planteados fueron desestimados por diversos motivos, que podemos agruparlos en dos: motivos procesales y motivos sobre el fondo.

En los recursos de amparo se alegaba, fundamentalmente, la vulneración del principio de igualdad (Art 14 CE), del derecho a la libertad individual (Art 17.1 CE), del derecho a la tutela judicial efectiva (Art 24 CE), así como del derecho a que las penas estén orientadas a la reinserción social (Art 25 CE). También se hacía alusión a la vulneración del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (Art

²⁰ José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta: etarra condenado en 1985 a veinte años de prisión por el asesinato de un policía nacional. Su puesta en libertad estaba prevista para el 29 de marzo de 2006, pero tras aplicarle la doctrina Parot dicha fecha se posponía hasta el 21 de Marzo de 2018.

²¹ Juan María Igarataundi Peñagarikano: detenido en 1987 en Guipúzcoa, acusado de pertenecer al comando de Udalaiz y por la comisión de varios atentados. Este etarra tenía prevista su excarcelación definitiva para el año 2009, pero tras la aplicación de la doctrina Parot, esta fecha se retrasaba hasta el 6 de junio de 2017.

²² José María Pérez Díaz: condenado en el año 1987 a 197 años de cárcel por un atentado que acabó con la vida de un guardia civil y dejó a otro herido grave en Zarautz (Gipuzkoa). Su licenciamiento definitivo estaba previsto para el 15 de diciembre de 2008, pero con la aplicación de la doctrina Parot, el licenciamiento se retrasaba hasta el año 2017.

24.1 CE), en relación con los principios de legalidad penal y de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas para el reo (Arts 25.1 y 9.3 CE)

Ante estas alegaciones, algunos de los argumentos del TC son los siguientes:

- No existe vulneración del principio de legalidad penal (Art 25.1 CE), que se refiere a la interpretación y subsunción de los hechos probados los tipos penales aplicables. Sino que la doctrina Parot se refiere al cómputo de la redención de las penas por el trabajo, que no implica una condena de mayor cuantía a la prevista legalmente.
- No existe vulneración del principio de igualdad ante la ley, ya que se trata de un cambio jurisprudencial suficientemente motivado. La jurisprudencia debe adaptarse a la realidad social y evolución del derecho penal, por lo que puede modificarse siempre que no se haga de manera arbitraria (Art 3.1 Código Civil, -en adelante CC-)
- No existe aplicación retroactiva del Art 78 CP 1995. Con la doctrina Parot se aplica el CP vigente en el momento de comisión de los hechos, el CP de 1973, pero con una nueva interpretación de los artículos 70.2 y 100 del mismo, que coincide con la posterior redacción del Art 78 CP 1995.

Esta postura del TC no ha sido unánime, sino que han existido votos particulares de los magistrados: José Antonio Martín Pallín, Joaquín Giménez García y Perfecto Andrés Ibáñez, como he mencionado anteriormente. Éstos discrepan con la doctrina implantada con la STS 197/2006 alegando, entre otras muchas cosas, que consideran que con la reinterpretación jurisprudencial llevada a cabo por la Doctrina Parot se ha vulnerado el derecho de libertad individual del Art 17.1 CE y el principio de seguridad jurídica (Art 24 CE), debido a que es una doctrina imprevisible que va en contra del reo.

IV. SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DE 26 DE JUNIO DE 2012 Y EFECTOS DE LA MISMA

IV.1. Qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Siguiendo a Díez de Velasco²³, podemos concluir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es un tribunal internacional que encarna la máxima autoridad judicial para la garantía de los Derechos Humanos y libertades fundamentales en toda Europa, cuya sede está en Estrasburgo (Francia).

Está compuesto por el mismo número de jueces que Estados contratantes, actualmente son 47 jueces, los cuales son elegidos por un mandato no renovable de nueve años por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a partir de una lista de tres nombres propuesta por cada Estado.

Es un Tribunal destinado a enjuiciar las posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH) y en sus Protocolos que puedan llevar a cabo los Estados parte de dicho Convenio.

Como consecuencia, cualquier individuo que considere haber sido víctima de la violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH o uno de sus Protocolos adicionales, podrá presentar una denuncia ante el TEDH, siempre que cumpla los requisitos exigidos en el Art 35 CEDH:

- Agotamiento de las vías o recursos internos e interposición del recurso ante el TEDH en los seis meses siguientes a la fecha de la resolución interna definitiva.
- Si se trata de una demanda individual, ésta no puede ser anónima ni ser igual que una demanda ya examinada anteriormente por el propio tribunal u otra instancia internacional.
- No puede ser manifiestamente mal fundada o abusiva.

El TEDH tiene dos tipos de funciones: consultivas y contenciosas. En el primer caso deberá emitir una mera opinión, mientras que en el segundo debe realizar un examen sobre el fondo del asunto y dictar una sentencia resolviendo el caso concreto planteado, para lo cual debe haber previamente examinado que se cumplan los requisitos de admisibilidad y haber intentado un acto de conciliación para evitar el juicio.

²³ DIEZ DE VELASCO, M, "Instituciones de Derecho Internacional Público" *Procedimientos de aplicación de las normas internacionales* Tecnos, Madrid 2010, p. 952

Para poder agilizar el procedimiento y atender a un mayor número de demandas, el TEDH divide en instancias procesales menores a los 47 jueces que forman parte del mismo, pudiendo actuar como jueces únicos, en Sala de 7 jueces o en la Gran Sala de 17 jueces.

Cada una de las instancias mencionadas tiene asignadas unas funciones y competencias:

- Instancia del juez único: Decidirá en primera instancia si declara admisible una demanda que se plantee. Si la declara inadmisibile el procedimiento morirá ahí, pero si declara su admisibilidad o tiene alguna duda sobre la misma, pasará a un comité de tres jueces que decidirá de manera definitiva si ésta es admisible o no. En caso de declararlas admisibles, sólo pueden dictar sentencia sobre el fondo siempre que se trate de un asunto sobre el que exista una jurisprudencia clara y asentada.

- Sala de 7 jueces: Decidirá sobre el fondo del asunto, cuando anteriormente no haya sido posible la conciliación. Contra la sentencia dictada por esta sala cabe recurso ante la Gran Sala.

- Gran Sala de 17 jueces: Pueden revisar sólo el fondo del asunto para comprobar si lo decidido por la sala de 7 jueces es correcto o no. Su decisión es definitiva, es la última instancia posible por lo que se acaba aquí el sistema europeo de protección de DDHH.

Hay que tener en cuenta que a pesar de que estos jueces miembros del TEDH son independientes y que son elegidos a propuesta de un Estado firmante, forman parte del Tribunal a título individual y no representan a dicho Estado. A pesar de esa independencia, un juez no podrá actuar nunca como juez único en un proceso contra el Estado del que es nacional, aunque podrá ser invitado a participar en un Comité de manera excepcional para formar parte del tribunal cuando el mismo decida en Sala de 7 jueces o en Gran Sala de 17 jueces.

Es el último recurso del que disponen los actores; quienes tras agotar la vía interna podrán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que será el que tenga la última palabra sobre su situación concreta, ya que no existe instancia jurisdiccional superior alguna.

IV.2. Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un Tratado Internacional por el que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa (todos los Estados europeos salvo

Bielorrusia y Kazajistán) se comprometen a llevar a cabo una protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para ello, adoptan este convenio el 4 de noviembre de 1951 en Roma, que no entrará en vigor hasta el año 1953.

El CEDH se inspira principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)²⁴ y se adopta para poder afrontar las consecuencias devastadoras producidas por la Segunda Guerra Mundial.

Siguiendo a la catedrática ARACELI MANGAS MARTÍN²⁵, debemos destacar que en este Convenio se tipifican esos derechos y libertades fundamentales e instauran distintos organismos de control, todos ellos con sede en Estrasburgo: la Comisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Sin embargo, ante la proliferación de casos se vio la necesidad de reformar los mecanismos de control previstos en el convenio, con el objetivo de acortar la duración de los procedimientos. Por ello en el año 1998 se simplifican los mecanismos de control, sustituyéndolos por un único Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

IV.3. Origen

El origen de la Sentencia del TEDH de 26 de Junio de 2012 reside en la demanda interpuesta por Inés del Río Prada contra el Estado español, puesto que había sido condenada a un total de 3.000 años de prisión por los hechos delictivos cometidos desde 1982 a 1987, sobre los que aplicando la regla del límite máximo de cumplimiento de 30 años del Art. 70.2 CP 1973 saldría de la cárcel en el año 2017. Pero la controversia surge cuando el centro penitenciario de Murcia en el que se encontraba la condenada Inés del Río Prada, tras aplicar los beneficios penitenciarios sobre esa pena de 30 años estima que la puesta en libertad de la terrorista debía ser en el año 2008. Ante esta situación, la Audiencia Nacional solicitó al centro penitenciario de Murcia que recalculara dicha fecha teniendo en cuenta la Doctrina Parot, ya que es la que debe aplicarse a los condenados por el Código Penal de 1973. Finalmente, por providencia de

²⁴ DUDH: resultado de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 217 A. Supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, son derechos prepolíticos, Surge como solución o medida para superar las consecuencias devastadoras de la Segunda Guerra Mundial, se sustituye la Sociedad de las naciones por las Naciones Unidas y se elabora la DUDH como desarrollo de la Carta de las Naciones Unidas, que no disponía de un catálogo de derechos ni de mecanismos de garantía.

²⁵ MANGAS MARTÍN, A, “Instituciones y Derecho de la Unión Europea” *Derechos humanos y libertades fundamentales en la Unión Europea*, Tecnos, Madrid 2010, p. 129

30 de julio de 2009, se acordó fijar como fecha de licenciamiento definitivo de la recurrente el día 27 de junio de 2017.

Inés del Río no estaba conforme con esta decisión, por lo que antes de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos humanos, la abogada que la representaba (Didier Rouget) utilizó los mecanismos internos de los que disponían para poder reclamar:

1º.- Interpuso un recurso de suplica por vulneración del principio de irretroactividad de las reglas desfavorables para el reo, ya que con la aplicación de la Doctrina Parot su permanencia en la cárcel había aumentado 9 años.

Este recurso fue denegado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Auto de 13 de octubre de 2009, que alega que la doctrina no se pronuncia sobre el límite de ejecución, sino sobre la aplicación de los beneficios penitenciarios. Además no existe retroactividad ya que se le aplica la norma vigente en el momento de comisión de los hechos delictivos, aunque con una interpretación distinta.

2º.- Ante la negativa obtenida en el recurso de súplica, Inés del Río Prada interpone un recurso de amparo ante el TC contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 13 de octubre de 2009, en el cual solicita la suspensión de la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas. Por lo que aplicando la jurisprudencia anterior a la doctrina Parot del TS, Inés del Río Prada debía haber sido excarcelada el 2 de julio de 2008. Con la aplicación de la doctrina Parot retrasan su puesta en libertad nueve años, por lo que la ejecución de las resoluciones impugnadas ocasionaría un perjuicio a la recurrente que haría perder su finalidad al recurso de amparo interpuesto.

Este recurso fue admitido a trámite pero se denegó la petición de la recurrente de la suspensión de la doctrina Parot mientras se resolvía sobre el fondo, argumentando que del Art. 56.1 ²⁶de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC) se deduce que la admisión a trámite del recurso de amparo no conlleva la suspensión de la ejecución de los actos recurridos, ni siquiera en el supuesto expresamente previsto de la pérdida de finalidad del amparo, dado que la suspensión se condiciona a que no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona. Además el Tribunal Constitucional

²⁶ Art. 56.1 LOTIC: La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.

considera que en este caso no resulta procedente la puesta cautelar en libertad de la recurrente porque implicaría una perturbación grave del principio de cumplimiento de las penas del Art. 118 CE, debido a la gravedad de las penas que se están ejecutando. De admitirse su puesta en libertad, que es el objeto de amparo de la recurrente, supondría conceder un otorgamiento parcial anticipado del amparo, lo cual acaba con la naturaleza cautelar de la medida. Finalmente, el recurso de amparo fue desestimado por providencia de 17 de febrero de 2009 alegando falta de justificación de las quejas de la demandante por no existir transcendencia constitucional. Tras esta desestimación, el 11 de noviembre 2009, Inés del Río Prada interpuso un nuevo recurso de amparo en el que solicitaba por otrosí la suspensión de la ejecución de las resoluciones de la Audiencia Nacional, siendo de nuevo desestimada dicha pretensión por el TC mediante Auto 94/2012, de 21 de mayo. Ante la tardanza del TC en la emisión de este último auto - tardó más de tres años en contestar a la pretensión de la demandante- Inés del Río Prada desistió de su recurso de amparo en septiembre de 2012, acudiendo al TEDH de Estrasburgo, tras haber agotado todas las vías nacionales posibles

IV. 4. Sentencia

Por lo expuesto anteriormente, a los reos afectados por la doctrina Parot, tras agotar las vías internas con la denegación de amparo del TC, solo les queda como último recurso posible denunciar la situación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Esto es lo que ocurre en el caso de Inés del Río Prada, miembro de la banda terrorista ETA, que demanda al estado español ante el TEDH (demanda nº 42750/09), basándose en el Art 34²⁷ del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Inés del Río alega en su favor que se produce una aplicación retroactiva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dando lugar a la imposición de una pena superior a la fijada legalmente en el momento de comisión de los hechos. Por tanto, se ha

²⁷ Art. 34 CEDH: "El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho."

producido una violación del Art. 7 del CEDH²⁸, que prohíbe condenar por acciones u omisiones que en el momento de su comisión no fueran punibles, así como la imposición de penas más graves a las previstas legalmente.

Además las nuevas reglas de descuento se hacen a través de jurisprudencia, sin hacer ninguna modificación legal, como respuesta a las presiones política y mediática. Por lo que se viola también la “calidad de la ley” exigida en el Art. 7 CEDH.

Ante este argumento de la demandante, el gobierno español sostiene que el Art. 7 del CEDH se refiere a los delitos y sus sanciones, y no al cálculo de los beneficios penitenciarios. Considera necesario distinguir entre medidas que constituyen una pena y medidas relacionadas con la ejecución o aplicación de la pena, ya que sólo será aplicable el Art. 7 del CEDH en el primer caso. (STEDH 12 de febrero de 2008, *Kafkaris vs Chipre*)²⁹. Y también sostiene que, aunque el cálculo de los beneficios penitenciarios quede fuera del ámbito de regulación del Art. 7 CEDH, los delitos y penas ya estaban definidos en el Código penal de 1973 antes de la comisión de los hechos.

El gobierno español sostiene que el hecho de que la modificación se haya producido a través de la jurisprudencia y no en la normativa legal se debe a la progresiva evolución del derecho penal y, en ningún caso, a presiones políticas o mediáticas. Un simple cambio en la jurisprudencia sobre el cálculo de los beneficios penitenciarios no puede constituir una violación del Art. 7 CEDH, ya que de ser así se estaría afirmando la rigidez del derecho. Además cita jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos humanos en la que afirman que el Art. 7 CEDH no puede interpretarse como una prohibición de la aclaración gradual de las normas penales por la interpretación judicial de un caso a otro.

La recurrente considera que la aplicación a su caso de esa jurisprudencia novedosa, al aumentar su estancia en la cárcel 9 años, no puede ser considerada como una medida relacionada solamente con la ejecución de la pena debido a su gravedad y consecuencias.

²⁸ Art. 7 CEDH: No hay pena sin ley: Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.

²⁹ STEDH *Kafkaris vs Chipre* de 12 de Febrero de 2008: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se hace la distinción entre medidas que constituyen una pena y medidas relacionadas con la ejecución o aplicación de las penas, para aclarar el alcance del Art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

IV.5. Análisis realizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las posibles violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Estado español.

Tras atender a las alegaciones de ambas partes implicadas el TEDH resuelve esta cuestión en su Sentencia de 26 de Junio de 2010. El Tribunal se pronunciará sobre las posibles violaciones cometidas por el estado español de los artículos: 5.1, 7 y 14 del CEDH.

Vamos a ver el análisis sobre la posible violación o infracción de cada uno de estos artículos realizado por el TEDH:

1º) Artículo 7 Convenio Europeo de Derechos Humanos:

Considera que la garantía del Art. 7 CEDH es esencial y ha de interpretarse de manera que se asegure una protección efectiva frente a posibles arbitrariedades.

Este artículo no se limita a prohibir la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del acusado, sino que tanto el delito como la pena han de estar definidos claramente en la misma. Aunque es cierto que por muy clara que parezca estar una disposición legal, siempre hay presente un elemento de interpretación judicial.

El término “pena” utilizado en el Art. 7 CEDH es un concepto autónomo, por lo que el tribunal deberá valorar el caso concreto para ver si puede subsumirse en el precepto y proporcionar así la protección solicitada.

En este caso concreto de Inés del Río Prada, se recurre el cálculo de la condena total a cumplir y no la legislación aplicable en el momento de comisión de los hechos delictivos. Hay que determinar si la ley y la jurisprudencia cumplen con los principios de previsibilidad y accesibilidad.

Para el análisis de la previsibilidad del criterio jurisprudencial, el TEDH parte de que hasta el año 1995 no prevé explícitamente el cálculo de los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de las penas, ya que en los años anteriores el cálculo operaba sobre el límite máximo de cumplimiento de los 30 años.

El Tribunal se fija en la práctica de la jurisprudencia española, teniendo como referencia la Sentencia del TS de 8 de marzo de 1994, según la cual el límite de cumplimiento máximo de 30 años del Art. 70.2 CP 1973 es una nueva condena autónoma sobre la que deberán aplicarse los beneficios penitenciarios. En base a la jurisprudencia la demandante podría esperar beneficiarse de la remisión de penas.

El TEDH considera que la legislación española en su conjunto estaba formulada con la precisión suficiente, pero con la decisión de la Audiencia Nacional del estado español en el año 2008 de calcular el licenciamiento definitivo de Inés del Río Prada en base a la doctrina Parot, se le estaba aplicando una Sentencia del TS del años 2006, es decir, dictada con mucha posterioridad a la comisión de los hechos punibles y a la decisión de acumulación de penas.

De esta manera, el TEDH, considera que el cambio del método del cálculo de la pena tuvo importantes consecuencias en la duración real de la misma, al aumentar su estancia en prisión nueve años. Se trata de un cambio que va en detrimento de la demandante y que no concierne sólo a la ejecución de la pena. El cambio interpretativo no era previsible debido a la práctica penitenciaria y judicial hasta el momento, que era favorable al reo. Por tanto existe una vulneración cometida por el Estado Español del Art. 7 CEDH.

2º) Art. 5 Convenio Europeo de Derechos Humanos:³⁰

La demandante Inés del Río Prada considera que se ha producido la violación de este artículo tras su mantenimiento en prisión tras el año 2008, en el que debería haber salido de no haberse aplicado a su caso la Doctrina Parot.

El tribunal argumenta que la legislación nacional debe cumplir con la obligación de observancia de las normas de fondo y de procedimiento, debe existir calidad de la ley. Es decir, que la pena privativa de libertad sea accesible, precisa y previsible para evitar arbitrariedades. La demandante ha sido condenada en base a un procedimiento legal y por un tribunal competente, cumpliendo con los requisitos del Art. 5.1 a CEDH. Pero la duración real de la condena no era previsible, por lo que si existe una violación por parte del Estado Español del Art. 5.1 CEDH, al no cumplir con el requisito de regularidad.

3º) Artículo 14 Convenio Europeo de Derechos Humanos³¹:

³⁰ Art. 5 CEDH: Derecho a la libertad y a la seguridad: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos previstos en este artículo y con arreglo al procedimiento establecido por la ley.

³¹ Art. 14 CEDH: Prohibición de discriminación: El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

La demandante alega que la novedosa jurisprudencia instaurada por el TS en el año 2006 con la doctrina Parot se asienta en motivos políticos, buscando endurecer las penas a los miembros de ETA.

El Tribunal considera que esta alegación carece de fundamento ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene un alcance general, no solo afecta a los miembros de la banda terrorista ETA. Por tanto, el Tribunal considera que no existe violación alguna por parte del Estado Español del Artículo 14 CEDH.

El TEDH concluye admitiendo la existencia de la violación de los artículos 5.1 y 7 CEDH por parte del Estado Español en detrimento de la demandante Inés del Río.

Es decir, el TEDH no declaró que la detención fuera arbitraria ni improcedente en su origen, sino que la condena ya se había cumplido íntegramente, resultando desde ese momento inadmisibile la continuidad en prisión de la reo.

Además, en base al Art. 41 CEDH³² y Art. 5.5 CEDH³³ establece el deber del estado español de indemnizar a la reo afectada. La cuantía de la indemnización será de 30.000 euros en concepto de daño moral y de 1500 euros por los gastos del proceso, aunque inicialmente la demandante pedía una indemnización de 50.000 euros que se consideró desproporcionada.

³² Art. 41 CEDH: Satisfacción equitativa: Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.

³³ Art. 5.5 CEDH: Toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.

IV.6. Recurso del Estado Español contra la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de Junio de 2012.

Tras el dictamen emitido por la Sala de Siete Jueces del TEDH en la mencionada Sentencia de 26 de junio de 2012, el gobierno español solicitó la remisión del caso a la Gran Sala del TEDH, amparándose en el art 43.1 CEDH ³⁴.

Esta solicitud del Gobierno Español fue admitida, por lo que la Gran Sala del TEDH pasó a examinar el asunto para posteriormente pronunciarse sobre el mismo.

IV. 7. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de Octubre de 2013

La Gran Sala del TEDH tras examinar el caso resuelto previamente por la Sala de Siete Jueces del mismo Tribunal, ratifica la existencia de vulneraciones de los artículos 5.1 y 7 CEDH en las actuaciones del gobierno español. Para fundamentar esta decisión se basan en los mismos argumentos esgrimidos por la Sala de Siete Jueces del TEDH en la sentencia de 26 de junio de 2012, explicada en el punto IV.5.

IV.8. Efectos

Por tanto, las sentencias del TEDH tienen fuerza vinculante, son obligatorias para el Estado condenado pero no serán directamente ejecutables, por lo que será el propio Estado sancionado el que deba ejecutarlas, teniendo absoluta libertad para elegir el medio de cumplimiento, siempre que el mismo sea compatible con la legalidad.

Sin embargo, dentro de la libertad del Estado condenado para elegir el medio de cumplimiento hay excepciones:

- Cuando el Tribunal pueda ayudar al Estado indicándole el tipo de medidas posibles.
- Cuando el Tribunal indique una sola medida a llevar a cabo, debido a que la naturaleza de la violación no deja elección.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa el cumplimiento de las sentencias y especialmente que las sumas de dinero que el Tribunal concede a los demandantes en concepto de reparación por el perjuicio que hayan sufrido sean efectivamente satisfechas.

³⁴ Art 43 .1CEDH: En el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala.

En este caso concreto, el TEDH opta por una de las excepciones mencionadas anteriormente, ya que indica como medida la puesta en libertad lo más rápida posible de Inés del Río.

Con la resolución emitida por la Sala de Siete Jueces del TEDH en la Sentencia de 26 de junio de 2012, el estado español todavía tenía la posibilidad de recurrir la misma ante la Gran Sala del TEDH en base al art 43 CEDH. Pero con la confirmación de la Sentencia del año 2012 por la Gran sala del TEDH el 21 de octubre de 2013, la Sentencia gana firmeza y no podrá recurrirse, la Gran sala es la última instancia a la que se puede acudir.

IV. 9. Ejecución de las sentencias del TEDH y problemática de dicha ejecución en el ordenamiento jurídico español

Como ya hemos mencionado anteriormente, las sentencias del TEDH serán de obligado cumplimiento, en base al compromiso contraído entre los estados parte en el Convenio y a la declaración del art 46 CEDH.³⁵

Como destaca BUJOSA VADELL³⁶, no existe un sistema judicial formado jerárquicamente por los distintos sistemas estatales, es decir, los órganos del CEDH no son vistos como instancias superiores ante las que recurrir las resoluciones dictadas por los tribunales de los distintos ordenamientos internos. Dichos órganos no van a reparar errores en relación con el CEDH, ya sean de hecho o de derecho, sino que su función consiste en velar porque los estados parte cumplan con los compromisos emanados de la ratificación del CEDH y sus protocolos adicionales.

De la afirmación de que las STEDH son obligatorias pero no directamente ejecutables se deriva la imposibilidad de dicho Tribunal de declarar de manera directa la nulidad de una decisión o acto emitido por un tribunal del ordenamiento interno de un estado parte, sino que para que sus decisiones sean efectivas será necesaria la actuación de los órganos internos competentes del propio estado infractor.

³⁵ Art 46 CEDH: Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias:

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes.
2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.

³⁶ BUJOSA VADELL, L, "Las sentencias del tribunal europeo de derechos humanos y el ordenamiento español", *Las vías para asegurar la eficacia en el ordenamiento español de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Tecnos, Madrid 1997, p. 135.

Siguiendo lo establecido en el Art 54 CEDH, la sentencia se trasladará al Consejo de Ministros ³⁷ para que vele por su ejecución. Es decir, será el Consejo de Ministros el encargado de vigilar las medidas adoptadas por el estado parte en cuestión para cumplir con la sentencia del TEDH. Para ello, en cuanto tenga constancia de una STEDH que declare la violación del CEDH y/o conceda a la víctima una satisfacción equitativa conforme al art 41 CEDH³⁸, deberá inscribirla en el orden del día de manera inmediata para que a continuación, el Consejo invite al estado condenado a que le informe de las medidas internas tomadas para cumplir con la sentencia del TEDH. Si a la vista de dicho informe remitido por el Estado condenado al Consejo de Ministros, éste último considera que la Alta Parte contratante no ha dado cumplimiento al correspondiente fallo, remitirá de nuevo la cuestión al TEDH que podrá declarar que el fallo ha sido debidamente ejecutado, con lo que el Consejo de Ministros archivará sin más el asunto; o podrá declarar que el fallo no ha sido debidamente ejecutado, remitiendo el asunto de nuevo al Consejo de Ministros, que examinará las medidas que deban adoptarse.

En España existe una gran problemática en torno a la ejecución de las sentencias del TEDH cuyo contenido sea desfavorable a la posición mantenida por el gobierno español. Hay que tener en cuenta que las sentencias de dicho Tribunal pueden tener efectos directos e indirectos:

El efecto indirecto se refiere a que la labor interpretativa llevada a cabo por el TEDH sobre el CEDH, que afectará a todos los estados parte (eficacia erga omnes) buscando así cierta uniformidad. En España este efecto se consagra en el art 10.2 CE ³⁹ que cumple una función integrativa o interpretativa.

³⁷ Consejo de Ministros: También llamado Consejo de la Unión Europea. Es una de las instituciones de la UE en la que están representados los intereses nacionales. Según lo establecido en el Art 16.2 TUE (Tratado de la Unión Europea) está integrado por un representante de cada estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al gobierno del estado miembro al que represente.

³⁸: Art 41 CEDH: Satisfacción equitativa: Si el tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos, y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si procede, una satisfacción equitativa.

³⁹ Art 10.2 CE: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Pero la verdadera problemática se centra en los efectos directos, es decir, cuando la sentencia TEDH constata la infracción del CEDH por parte del estado español y se refiere a la posibilidad de obtener en el ámbito interno una reparación íntegra de los derechos y libertades violados.

El ordenamiento español sigue el modelo del monismo moderado en la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, por lo que las STEDH no tienen carácter ejecutivo directo, sino que su eficacia dependerá de lo que establezca el derecho nacional, debiendo acudir, en el caso español, a los artículos 96.1 CE⁴⁰ y 1.5 CC⁴¹ para ver la regulación de la relación entre el derecho internacional convencional y el derecho interno.

Cuando se declare que la infracción del CEDH procede de una norma de derecho interno - como es el caso examinado en la STEDH de 26 de junio de 2012 que resuelve el caso de Inés del Río Prada - los estados parte en el litigio deben acatar las decisiones del tribunal, asegurando a las personas dependientes de su jurisdicción los derechos y libertades que el Convenio reconoce a través de la interpretación y aplicación del TEDH. Aunque, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, la resolución de éste órgano no modifica ni deroga directamente la norma interna contraria al Convenio, porque las sentencias del TEDH son obligatorias pero no directamente ejecutables, por lo que el estado español adoptará las medidas necesarias para cumplir con la misma, pero dentro de los límites existentes en su derecho interno. Esta obligatoriedad se deriva del art 46 CEDH, que establece que *"Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes"*. Pero acatar no es sinónimo de ejecutar, sino que consiste en hacer de buena fe todo lo posible para dar cumplimiento a la sentencia.

Es verdad que el artículo 46.2 del CEDH dice que *"la sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución"*. Sin embargo, el artículo 41 CEDH asume la licitud de llevar a cabo una prestación equitativa cuando un Estado parte no pueda dar perfecto cumplimiento a una sentencia

⁴⁰ Art 96.1 CE: Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

⁴¹ Art 1.5 CC: las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».

del TEDH, si bien ello no exime al Estado parte de comunicar al Comité de Ministros lo que ha hecho para dar cumplimiento a la sentencia en la medida de lo posible y justificar por qué.

No obstante, como consecuencia de hacer efectivo el cumplimiento puede derivarse para el estado infractor la necesidad de incluir un cambio legislativo que modifique o derogue el precepto en cuestión, sin que se pueda sustituir por una prestación equitativa. Se trata así de evitar la proliferación de demandas, que pueden dar lugar a responsabilidad internacional del Estado.

Además en el ordenamiento español, la potestad jurisdiccional es una competencia exclusiva de los órganos del poder judicial, cuyo ejercicio no se ha transferido al Consejo de Europa porque el CEDH se ha ratificado por el art 94.1⁴² y no por el 93⁴³CE. Pero el principal problema es que el ordenamiento interno no ha previsto un órgano competente ni un procedimiento concreto para llevar a cabo la ejecución de dichas sentencias.

Si bien es cierto que debemos tener en cuenta el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su art 5.2 establece que *“las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos en los que España haya sido parte demandada y en que se declare la violación de un derecho, serán motivo para la revisión de la sentencia firme dictada por el correspondiente Tribunal español en el proceso a quo, a instancia de quien hubiera sido demandante ante dicho Tribunal.”*

⁴² Art 94.1: La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

- a) Tratados de carácter político.
- b) Tratados o convenios de carácter militar.
- c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

⁴³ Art 93 CE: Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

V. IMPACTO SOCIAL

Es importante analizar el efecto que ha tenido la anulación de la doctrina Parot en la sociedad española, ya que tras la sentencia del TEDH muchos presos han sido excarcelados, generándose con ello una gran alarma social.

Hay que tener en cuenta que han quedado en libertad no sólo miembros de la banda terrorista ETA, sino también conocidos violadores y asesinos, de los cuales algunos han reincidido, volviendo a cometer hechos punibles.

En general, la reacción entre los ciudadanos de a pie ante la Sentencia del TEDH de 21 de octubre de 2013 que anula la doctrina Parot ha sido de indignación y total desacuerdo, ya que consideran que estos individuos no van a rehabilitarse nunca y eso genera una gran inseguridad en las calles. Además, los familiares de las víctimas siempre van a querer que los causantes de su dolor estén el mayor tiempo posible en la cárcel. Lo que genera mayor incompreensión entre los ciudadanos es ver como sujetos que han sido condenados a cientos o miles de años de prisión por todos los delitos graves cometidos, “solamente” cumplen como mucho 40 años de prisión.

Sin embargo, también hay posturas simpatizantes con la opinión del TEDH, normalmente de juristas y personas más especializadas en estos temas jurídicos que al igual que el resto de la ciudadanía se muestran reacios a cualquier manifestación de terrorismo, pero también tienen en cuenta que el castigo de este tipo de delitos debe compatibilizarse con el cumplimiento de los valores y garantías constitucionales de un estado social, democrático y de derecho como es el estado español.

Las personas que apoyan la decisión del TEDH sostienen que hay que tener en cuenta que en España no cabe la cadena perpetua, ya que las penas deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social y, es en base a este principio consagrado constitucionalmente en el Art. 25.2 CE, así como en base al principio de seguridad jurídica del Art. 24 CE, por los que una vez que se ha condenado a una persona los límites de la pena ya no podrán modificarse, ya que de lo contrario estaríamos afectando a principios y valores fundamentales del estado de derecho. Aunque se trate de delitos muy graves hay que intentar ser imparcial y evitar el impulso moral de buscar el modo de aumentar la duración de las condenas de estos reos una vez que han cumplido las que les han sido impuestas originariamente, en ningún caso debemos desatender a los principios y reglas que hacen de España un estado social, democrático y de derecho, como se destaca en el Art. 1 CE.

Cabe nombrar como casos más mediáticos de presos liberados tras la anulación de la doctrina Parot los siguientes:

→Miquel Ricart: Detenido por ser el autor del conocido crimen de Alcácer, en el que secuestró, violó, torturó y asesinó a tres niñas de 15 años de Alcácer (Valencia) en 1992 cuando se dirigían a una discoteca de Picassent (Valencia) haciendo autoestop. Su licenciamiento definitivo, aplicando la doctrina Parot, estaba previsto para el año 2023, aunque finalmente fue excarcelado el 29 de Noviembre del año 2013, ya que si no se le hubiera aplicado dicha doctrina, debía haber sido puesto en libertad en el año 2011.

→Félix Vidal Anido: más conocido como “el violador del estilete”. Fue condenado a 70 años de prisión por la comisión de varios delitos de agresión sexual, dos de los cuales fueron muy violentos. Tras la anulación de la doctrina Parot fue puesto en libertad en diciembre de 2013, sin embargo, el 11 de abril de 2014 fue nuevamente detenido por un intento de agresión sexual en Lugo, decretándose prisión provisional sin fianza debido al peligro de que volviera a reincidir.

→Pedro Luis Gallego Fernández: “el violador del ascensor” porque accedía a los portales de sus víctimas aprovechando su profesión de mecánico de ascensores. Condenado a más de 273 años de prisión por 18 violaciones y agresiones sexuales y el asesinato de Leticia Lebrato y Marta Obregón, en 1992 y 1993 respectivamente. Se le aplicó la doctrina Parot para prorrogar hasta 2022 su encarcelamiento, ya que sin la aplicación de dicha doctrina debía haber salido a finales de 2008.

→Inés del Río Prada: Es la más mediática ya que ha sido su recurso ante el TEDH el que ha dado lugar a la anulación de la doctrina Parot. Fue condenada en 1989 a más de 3000 años de cárcel por pertenecer al “comando Madrid” y estar implicada en diversos atentados, como el de la plaza de la República dominicana en Madrid. Sin la aplicación de la doctrina Parot hubiera sido puesta en libertad en julio de 2008, mientras que con la aplicación de dicha doctrina su licenciamiento definitivo estaba previsto para el año 2017.

Tras la STEDH de 21 de octubre de 2013 que anula la doctrina Parot, fue puesta en libertad el 23 de octubre del mismo año.

→Henri Unai Parot: miembro de la banda terrorista ETA que da nombre a la conocida y problemática doctrina del Tribunal Supremo, con la STS 197/2006. Fue condenado a unos 4800 años de prisión por diversos atentados, entre ellos el efectuado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987. Su puesta en libertad con la aplicación de la doctrina Parot estaba prevista para el año 2020, pero finalmente su licenciamiento definitivo tuvo lugar en octubre de 2013.

→Domingo Troitiño Arranz: miembro de ETA condenado a casi 800 años de prisión por cometer el atentado contra los almacenes de Hipercor en Barcelona. Su Condena habría expirado en el año 2006, pero con la aplicación de la doctrina Parot debía permanecer en prisión hasta el año 2017.

Normalmente es muy difícil lograr la reinserción en la sociedad de los sujetos excarcelados, que es uno de los fines a los que deben orientarse las condenas, previsto en el art 25 CE. Pero además, en estos casos con la alarma social generada en torno a la anulación de la doctrina Parot, impulsada en gran medida por la publicidad y seguimiento continuo efectuado por los medios de comunicación de los sujetos más mediáticos, se hará prácticamente imposible la reinserción de los mismos.

CONCLUSIÓN

Nos encontramos, por tanto, con el problema de diferenciar entre derecho y moral colectiva, que es una de las más delicadas cuestiones que se presentan en la filosofía del derecho y que ha dado lugar a una de las grandes controversias en el pensamiento contemporáneo, puesto que no se trata de conceptos independientes.

Tanto la moral como el derecho son normas de conducta humana; las dos se encaminan hacia la creación y regulación de un orden, pero lo hacen de diferente manera.

La moral valora la conducta en sí misma, la integridad de las personas, ésta actúa sobre la conciencia o sea sobre la intimidad del sujeto, es “el orden interior de nuestra vida”, “la ciencia del bien o del mal” y no tiene sanción disciplinaria alguna, sólo el daño que haga a la integridad y sobre la conciencia del sujeto.

El derecho, en cambio, no toma nunca en cuenta la conducta interior del hombre, sino solamente por las consecuencias externas que pueda acarrear, o sea que el derecho no se propone llevar al sujeto al cumplimiento de su destino, no se propone hacerlos buenos, sino tan sólo armonizar el tejido de sus relaciones externas, en vista de la coexistencia y cooperación. La violación de éste si tiene una sanción disciplinaria en consonancia con los actos cometidos.

Si "Derecho" y "Moral" designasen una misma realidad, es decir, que fuesen lo mismo, sobrarían los defensores de la tesis de la "separación" entre ambos conceptos, y estarían, también, de más quienes aseveran que están relacionados de algún modo.

ACRÓNIMOS

-Art: Artículo

- CC: Código Civil

-CE: Constitución Española

-CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos

-CP: Código Penal

-LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial

-LOTIC: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

-LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal

-TC: Tribunal Constitucional

-TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

-TS: Tribunal Supremo

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

JURISPRUDENCIA ANALIZADA:

Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006 de 20 de febrero de 2006.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de 26 de Junio de 2012.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de 21 de Octubre de 2013.

BIBLIOGRAFÍA:

ALCÁCER GUIRAO, R, “Tribunal Europeo de Derechos Humanos – La ‘doctrina Parot’ ante Estrasburgo: Del Río Prada c. España (STEDH 10.7.2012, n.o 42750/09). Consideraciones sobre la aplicación retroactiva de la jurisprudencia y la ejecución de las sentencias del TEDH”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, Núm. 43, 2012 .p. 929-952.

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. “El nuevo modelo de política criminal”, *Jueces para la Democracia*, Núm. 57, 2006. p. 18-32.

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J y DOPICO GÓMEZ-ALLER, J, *Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012*, Tirant lo Blanch, Valencia 2013.

BALAGUER CALLEJÓN, F, *Manual de Derecho Constitucional*, Tecnos, Madrid 2011.

BUJOSA VADELL, L, *Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Ordenamiento español*, Tecnos, Madrid 1997.

CUERDA ARNAU, M.L “Cambios jurisprudenciales y retroactividad desfavorable (A propósito de la STEDH Del Río Prada c. España)”, *Revista Penal*, Núm. 31, 2013 p. 52-69.

CUERDA RIEZU, A.R. “El concurso real y la acumulación de penas en la sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, relativa al caso Henri Parot: observaciones legales y constitucionales”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, Núm. 7, 2006, p. 215-296.

DIEZ DE VELASCO, M, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Tecnos, Madrid 2010.

FIGUERUELO BURRIEZA, A, *El recurso de amparo: Estado de la cuestión*, Biblioteca Nueva, Madrid 2001.

GONZÁLEZ FRANCO, J.A y RAGUÉS I VALLÈS, R. “La refundición de penas en el derecho penal vigente: a propósito del caso ‘Henri Parot’”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, Núm. 730, 2007, p. 2-4.

LÓPEZ PEREGRÍN, C. “¿Lucha contra la criminalidad mediante el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas?”, *Revista Española de Investigación Criminológica*, Núm. 1, 2003, p. 1-20.

LUZÓN PEÑA, D.M. “Actuación en conciencia y objeción de conciencia como causa de justificación y como causa de exculpación frente a la punición del delincuente por convicción”, *InDret*, Núm. 1, 2013, p. 1-22.

MANZANARES SAMANIEGO, J.L, “Apuntes de urgencia sobre la Sentencia del Tribunal Supremo en relación con el denominado Caso Parot”, *La Ley*, Núm. 2, 2006, p. 1325-1327.

MARTÍN MANGAS, A, *Derecho e instituciones de la UE*, Tecnos, Madrid 2010.

MUÑOZ CLARES, J. “Sobre la llamada ‘Doctrina Parot’”, *Revista General de Derecho Penal*, Núm. 18, 2012, p. 1-18.

ORTS BERENGUER, E., “Comentarios a la Sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero (caso Parot)”, *Revista del Instituto Universitario de investigación en Criminología y Ciencias Penales de la UV*, Núm. 1, 2009, p. 27-43.

QUERALT, J.J. “Terrorismo y castigo penal. Cumplimiento íntegro de las penas y doctrina Parot”, *InterseXiones*, Núm. 1, 2010, p. 115-135.

RADBRUCH, G. “El delincuente por convicción”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, Núm. 7, 2005, p. 1-5.

SÁNCHEZ MELGAR, J, “No hubo irretroactividad” *Diario El Mundo*, 26 de Octubre de 2013.

SANTOS PÉREZ, J.A., “Análisis crítico de la Doctrina Parot” *www.lexnova.es*, 29 de Octubre de 2012.

TÉLLEZ AGUILERA, A. “La ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas: una nota de urgencia”, *La Ley*, Núm. 4, 2003, p. 1641-1651.

VIVES ANTÓN, T. “Sobre la dignidad del sistema jurídico”, *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, Núm. 1, 2011, p. 59-74.

PAGINAS WEB CONSULTADAS:

www.juecesdemocracia.es

www.noticiasjuridicas.com

www.derechoshumanos.net

www.tribunalconstitucional.es